

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en la Edición Vespertina del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 23 de marzo de 2015.

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitante (sic) sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 164

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, quedando en los siguientes términos:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que requieran los siguientes Sujetos de la Ley:

I. Las Dependencias del Ejecutivo;

II. Las Entidades del Ejecutivo; y

III. Los Municipios del Estado, así como las Entidades del Municipio, que no cuenten con disposiciones administrativas en esta materia.

Los Poderes Judicial y Legislativo, cuando realicen acciones relativas a las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberán sujetarse, con base a su normatividad interna, a los procedimientos que establece el artículo 39 de esta Ley, apegándose a los montos que la misma prevé para cada uno de ellos.

Las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Los contratos que celebren los Sujetos de la Ley Contratantes con las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, con quienes conforman la Administración Pública Federal o Municipal, con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Poderes de otras entidades federativas, con el Gobierno del Distrito Federal, con Municipios de la República Mexicana o sus entidades públicas, con los órganos con autonomía constitucional, o entre alguno de los entes públicos señalados anteriormente, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando el ente público obligado a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga la capacidad para hacerlos por sí mismo y contrate un tercero para su realización.

Los Sujetos de la Ley Contratantes que realicen contrataciones de adquisiciones o arrendamientos de bienes y prestación de servicios, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, no se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, dichos actos estarán dentro del ámbito de aplicación de la legislación federal en la materia.

Los Sujetos de la Ley, se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridades fiscalizadoras: son aquellas facultadas para revisar y evaluar el gasto público y aplicar las sanciones a que se refiere esta Ley; en el ámbito de sus competencias, esto es, respecto del Gobierno del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y, en cuanto a los Municipios, las Contralorías Municipales;

II. Comité: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado, o los Comités Municipales o de las Entidades del Ejecutivo o del Municipio, según corresponda.

III. Dependencias del Ejecutivo: las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados;

IV. Entes requirentes: las Dependencias del Ejecutivo o de los Municipios que respectivamente soliciten a la Oficialía Mayor o a su similar en los Municipios, la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios; así como las unidades administrativas que requieran de las Entidades del Ejecutivo o de los Municipios dichas contrataciones;

V. Entidades del Ejecutivo: los organismos públicos descentralizados, incluyendo universidades públicas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos a los que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes u otras disposiciones legales aplicables den ese carácter;

VI. Entidades del Municipio: las Entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a esta autoridad, en los términos que marca (sic) Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;

VII. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que obtengan los Entes requirentes, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de información;

VIII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas;

IX. Municipios: los municipios del Estado de Aguascalientes;

X. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los Licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica;

XI. Oficialía Mayor: la Oficialía Mayor del Estado de Aguascalientes. Cuando se refiera a su similar en los Municipios o en las entidades, se entenderán las Secretarías de Administración, Direcciones administrativas o sus equivalentes;

XII. Padrón: el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal, según sea el caso.

XIII. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento o más al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en un mismo procedimiento de contratación o de adquisición;

XIV. Proveedor: la persona que participe en cualquier procedimiento de contratación de adquisición de bienes muebles, arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, así como la que resulte adjudicada, la que firme y/o ejecute el contrato correspondiente.

XV. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes;

XVI. Sistema Electrónico: El sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que implemente el Poder Ejecutivo.

XVII. Sujetos de la Ley: los señalados en las fracciones I, II y III del artículo 1° de la presente Ley;

XVIII. Sujetos de la Ley Contratantes: los que celebran los contratos de adquisiciones y arrendamientos de bienes y prestación de servicios, y que en los procedimientos de contratación tienen el carácter de convocante: la Oficialía Mayor para la Administración Pública Estatal Centralizada; las Entidades del Ejecutivo; los Municipios del Estado y sus Entidades;

XIX. Tesorerías: Tesorerías Municipales o sus equivalentes en las entidades.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, entre las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestaciones de servicios, quedan comprendidos:

I. Las contrataciones de adquisiciones de bienes muebles;

II. Las contrataciones de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles;

III. Las contrataciones de adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que requieran los Sujetos de la Ley de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas;

IV. Las contrataciones de adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del Proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la

responsabilidad de los Sujetos de la Ley, cuando su precio sea superior al de su instalación;

V. Las contrataciones de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble

VI. Las contrataciones para la reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas, y contrataciones de servicios de limpieza y vigilancia;

VII. Las contrataciones de prestación de servicios de personas físicas, excepto las contrataciones de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios; siempre que éstos últimos sean realizados por ellas mismas sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico

VIII. Las contrataciones de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones; y

IX. En general, las contrataciones de los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para los Sujetos de la Ley, salvo que las contrataciones se encuentren reguladas en forma específica por otras disposiciones legales.

En caso de duda, corresponderá a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y a su similar en los Municipios, a solicitud de los Sujetos de la Ley de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.

Artículo 4°.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado desarrollará los procedimientos previstos en esta Ley por conducto de la Oficialía Mayor, respecto a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios de la Administración Pública Estatal Centralizada y llevará a cabo la contratación correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Será responsabilidad de las Direcciones Administrativas de cada Dependencia o de las unidades que ejerzan dichas funciones en las mismas, el inicio de los procesos correspondientes, su seguimiento, la recepción de los bienes y servicios solicitados, así como el trámite de pago; es decir la ejecución, validación y comprobación de su gasto, así como el apego de sus operaciones a todos los lineamientos y normatividad aplicables. La Oficialía Mayor no será responsable ante las Autoridades fiscalizadoras por los actos señalados en este párrafo. Su responsabilidad se agota con la realización del procedimiento de contratación y la firma del contrato correspondiente.

Los Municipios y sus Entidades, así como las Entidades del Ejecutivo aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley por conducto de sus Secretarías, Direcciones Administrativas o la Unidad Administrativa correspondiente, respecto a sus adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios, quienes tendrán las mismas responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior.

La Oficialía Mayor o sus similares en los Municipios dentro del ámbito de su competencia, podrán brindar la asesoría técnica que les sea solicitada por las Entidades del Ejecutivo o del Municipio, según corresponda.

Artículo 5°.- La Oficialía Mayor y su similar en los Municipios, así como las Autoridades fiscalizadoras, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para interpretar esta Ley, previa opinión favorable de los Comités respectivos, cuando por el monto de la contratación corresponda su intervención; así como para emitir los lineamientos correspondientes.

Los Sujetos de la Ley Contratantes dictarán las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Artículo 6°.- Será responsabilidad de los Entes requirentes obtener los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes muebles e inmuebles con que cuenten o, se hayan asignado a las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, en los términos previstos por la Ley de Bienes del Estado.

Artículo 7°.- En materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los Sujetos de la Ley Contratantes, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.

Artículo 8°.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil, la Ley del Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, todos del Estado de Aguascalientes.

Artículo 9°.- Los Sujetos de la Ley Contratantes no podrán financiar al Proveedor. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 69 de esta Ley.

Los Entes requirentes podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y, por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de

suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice.

Artículo 10.- Los actos, contratos y convenios que realicen o celebren los Sujetos de la Ley en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

Artículo 11.- La Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, mediante disposiciones de carácter general, determinarán, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que en forma consolidada, podrán requerir los Sujetos de la Ley con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, así como para fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las tareas de mantenimiento y servicio. Para tales efectos, la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, se limitarán a efectuar los procedimientos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios solicitadas, siendo responsabilidad de Los Sujetos de la Ley Contratantes, la suscripción del contrato de que se trate.

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que los Sujetos de la Ley Contratantes puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.

En materia de seguros que se contraten a favor de las Dependencias del Ejecutivo o del Municipio, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, en su caso, implementarán procedimientos de contratación consolidada y celebrarán los contratos correspondientes. Las Entidades del Ejecutivo o del Municipio podrán solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las Dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA OFICIALÍA MAYOR Y EL COMITÉ

CAPÍTULO PRIMERO

De las Atribuciones de la Oficialía Mayor

Artículo 12.- La Oficialía Mayor tendrá las atribuciones siguientes:

I. Solicitar a las Dependencias de Ejecutivo, la presentación de sus proyectos de planes de adquisiciones, arrendamientos y de la contratación de servicios;

II. Celebrar las contrataciones de las Dependencias del Ejecutivo y sus órganos desconcentrados, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, excepto aquellas que por el monto, o de conformidad con la normatividad aplicable, puedan efectuarlas directamente las Dependencias del Ejecutivo;

III. Rechazar de manera fundada y motivada las requisiciones de compra hechas por los Entes requirentes que a su juicio no se justifiquen;

IV. Integrar el Comité en los términos de la presente Ley;

V. Formular lineamientos generales en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza y, obtener la opinión favorable del Comité para su expedición cuando el monto de la contratación corresponda al de licitación;

VI. Fijar la política y procedimientos de contratación de la Administración Pública Estatal en materia de arrendamiento de bienes inmuebles, cuando ésta tenga el carácter de arrendataria;

VII. Aprobar los formatos conforme a los cuales se celebren las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios;

VIII. Elaborar el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y modificarlo en los términos que considere conveniente;

IX. En el ámbito de su competencia atender y ejecutar las resoluciones emitidas por el Comité;

X. Nombrar a los servidores públicos encargados de recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogos, esto es, las personas encargadas de organizar y coordinar todas las actividades y actos de los procedimientos de contratación;

XI. Emitir su resolución respecto de las mejores condiciones de precio, pago y entrega ofertadas por los Proveedores para la contratación de adquisiciones, arrendamiento de bienes y prestación de servicios, previo dictamen técnico emitido por el Ente requirente en cuanto a especificaciones y calidad;

XII. Exigir, a solicitud del Ente requirente, en su caso, la restitución de los pagos en exceso, la reposición de mercancías o servicios, el ajuste de precios, la oportunidad del cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias, cuando por las circunstancias que se determinen así se requiera;

XIII. Fomentar la incorporación de más personas al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, que reúnan los requisitos para su registro;

XIV. Cancelar los pedidos, rescindir los contratos, aprobar el pago de indemnizaciones a los Proveedores que en su caso se consideren procedentes, previo dictamen emitido por el Ente requirente, e imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones que correspondan a los Proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de pedidos o contratos;

XV. Remitir la información correspondiente a la Autoridad fiscalizadora para la imposición de sanciones e inhabilitaciones de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría para determinar y ejecutar las sanciones a que se hagan acreedores los Proveedores a los que se refiere esta Ley; y

XVII. Las demás que le otorguen esta Ley u otras disposiciones legales.

Artículo 13.- Las facultades conferidas en el artículo que antecede, con excepción de la prevista en la fracción VIII, en lo conducente, se entienden conferidas a los similares de la Oficialía Mayor en los Municipios, y en las Entidades del Ejecutivo o del Municipio en el ámbito de sus competencias.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Integración, Sesiones, y Atribuciones del Comité

Artículo 14.- Los Sujetos de la Ley Contratantes deberán constituir sus comités respectivos como órganos de consulta y estudio, respecto de las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios cuyo monto corresponda al de licitación.

Artículo 15.- El Comité de los Sujetos de la Ley estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el titular de la Oficialía Mayor, su similar en los Municipios o el Director General en las Entidades del Ejecutivo o del Municipio, con voz y voto;

II. Un Secretario Ejecutivo con voz y voto, que será designado por el Sujeto de la Ley Contratante;

III. Tres vocales con voz y voto que serán:

Un representante de la Secretaría o Tesorerías; un representante de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, o su similar en los Municipios; y un representante de la cámara o asociación del ramo correspondiente;

IV. Un vocal con voz pero sin voto que será:

Un representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o del órgano interno de control de la Entidad o Municipio, según corresponda; y

V. Un representante del Ente requirente con voz pero sin voto.

En el caso de las Entidades del Ejecutivo o del Municipio, los vocales señalados en la fracción III anterior, a excepción del correspondiente al representante de la Cámara o Asociación del ramo, serán designados por el Titular de la Entidad del Ejecutivo o del Municipio.

Los vocales del Comité deberán tener como mínimo nivel jerárquico de director general en las dependencias o los que realicen las funciones equivalentes en las Entidades o Municipios.

Los integrantes del Comité, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área o su equivalente; quienes en ausencia del titular, tendrán las mismas facultades y atribuciones de este último.

Artículo 16.- El Comité se reunirá mensualmente y cuando el Presidente del Comité o la mayoría de sus integrantes con voto lo consideren necesario.

A las reuniones podrán ser invitados los servidores públicos cuyas funciones o actividades estén relacionadas con los asuntos que se encuentren en trámite ante el Comité y, cuya presencia se estime conveniente.

El Comité se regulará por el Manual de Integración y Funcionamiento, propuesto por el Presidente y aprobado por el Comité, el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 17.- Las sesiones del Comité se declararán legalmente instaladas con la presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, serán presididas por el Presidente y en su ausencia y la de su suplente, por el Secretario Ejecutivo.

Las decisiones se tomarán por el cincuenta por ciento más uno de votos; en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad; en ausencia del Presidente y su suplente, el Secretario Ejecutivo gozará de dicha facultad.

Artículo 18.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de operación que establezca la Oficialía Mayor, su similar en los Municipios, en las Entidades del Ejecutivo o del Municipio y, promover que la información se procese de preferencia en sistemas computarizados;

II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en los artículos 61 y 63;

III. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;

IV. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlos a consideración del Oficial Mayor o su similar en los Municipios, o al Director General de las Entidades del Ejecutivo o de los Municipios y, en su caso, autorizar los supuestos no previstos en los mismos.

V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

VI. Las demás que le sean conferidas en esta Ley.

Artículo 19.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar a las sesiones de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité;

II. Autorizar el orden del día.

III. Coordinar y presidir las sesiones del Comité;

IV. Requerir a los integrantes del Comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Integración y Funcionamiento del mismo;

V. En casos de empate, emitir su voto de calidad; y

VI. En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las anteriormente señaladas.

Artículo 20.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar a los Entes requirentes los documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del Comité y en su caso verificar que se encuentren completos para efectos administrativos;

II. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión, los documentos que contengan la información resumida de los casos que se

dictaminarán y los demás documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del Comité.

III. Citar a las reuniones por acuerdo del Presidente;

IV. Someter los expedientes respectivos a la aprobación del Comité;

V. Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente a cada reunión que se cite;

VI. Llevar a cada una de las reuniones del Comité la documentación adicional que pueda requerirse;

VII. Ejercer las facultades de decisión del Presidente del Comité en ausencia de éste y su suplente;

VIII. Llevar control y resguardo de las actas de las reuniones del Comité y de los expedientes correspondientes;

IX. Dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el Comité;

X. Elaborar y presentar semestralmente ante el Presidente del Comité el informe de actividades realizadas por dicho órgano;

XI. Las demás que le confiera el Comité o la normatividad aplicable.

Artículo 21.- Los vocales tendrán las siguientes funciones:

I. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el orden del día, apoyando su análisis sobre los informes y documentos que lo sustenten o fundamenten;

II. Manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, sus propuestas y alternativas de solución, su voto o inconformidad con los asuntos tratados de manera fundada y razonada, a fin de que se pueda llegar a una resolución; y

III. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada asistencia.

IV. Las demás que le confiera el Comité o la normatividad aplicable.

TÍTULO TERCERO

DEL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 22.- La Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, tendrán a su cargo el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal, según sea el caso, con el objeto de llevar el registro de las personas físicas o morales que deseen proveer, arrendar bienes, o prestar servicios a los Sujetos de la Ley.

El Padrón proporcionará a los Sujetos de la Ley información sobre las personas que cuenten con capacidad de proveer, arrendar bienes, o prestar servicios en las condiciones y calidad requeridas.

Artículo 23.- Para su inscripción en el Padrón, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Presentar su solicitud en el formato aprobado por la Oficialía Mayor;
- II. Las personas morales deberán presentar copia certificada de su acta constitutiva y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como acreditar con el instrumento público respectivo la personalidad de su representante legal;
- III. Las personas físicas deberán presentar documentos oficiales que acrediten su nacionalidad e identificación y en su caso, el instrumento público con que acrediten la personalidad de su representante legal;
- IV. Demostrar su solvencia económica y capacidad para proveer o arrendar bienes o prestar servicios.
- V. Presentar constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como presentar la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
- VI. Proporcionar la información complementaria que solicite la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 24.- La Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, dentro de un término que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción o modificación en el Padrón.

Si transcurrido el término que se señala en el párrafo primero de este artículo, la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios no resuelve sobre la aceptación o negativa del registro o su refrendo, sin más trámite deberá otorgarse.

En caso de negativa, ésta se comunicará por escrito fundando y motivando las razones de la misma.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios, requerirá al solicitante para que en un término de cinco días hábiles posteriores a su recepción, la aclare o complete, en caso contrario se le tendrá por no presentada.

Artículo 25.- El registro en el Padrón tendrá vigencia desde su fecha de expedición hasta que concluya el año fiscal en el que se efectúe; los Proveedores que deseen continuar inscritos, deberán solicitar su refrendo durante los tres primeros meses de cada año, debiendo actualizar la información de su registro.

La falta de presentación de solicitud para obtener el refrendo o la negativa de éste, traerá como consecuencia la cancelación del registro a su vencimiento, sin necesidad de resolución expresa en tal sentido y sin perjuicio del derecho del interesado de formular nueva solicitud para obtenerlo.

El registro y el refrendo por actualización, se solicitarán en los formatos que expida la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios.

Artículo 26.- La Oficialía Mayor o su similar en los Municipios podrán suspender el registro en el Padrón hasta por el término de veinticuatro meses, cuando el Proveedor:

- I. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Oficialía Mayor o sus similares en los Municipios y las entidades o las Autoridades fiscalizadoras ejerzan sus facultades de comprobación, inspección y vigilancia; o,
- II. No sostenga su propuesta económica en determinada partida de un procedimiento de contratación, a menos que indemnice al Estado o Municipio por los daños y/o perjuicios ocasionados.

Artículo 27.- La Oficialía Mayor podrá cancelar el registro de un Proveedor o negar el refrendo del mismo cuando:

- I. Se compruebe que hubiere actuado con dolo o mala fe y la información proporcionada sea falsa o inconsistente;
- II. Incumpla un contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios, o se niegue a subsanar el incumplimiento en un periodo razonable establecido por los Sujetos de la Ley Contratantes en conjunto con los Entes requirentes; o

III. Reincida en la comisión de los actos a que se refiere el artículo anterior.

TÍTULO CUARTO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 28.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar los Entes requirentes, deberán ajustarse a:

I. Los objetivos y prioridades del Plan Sexenal del Gobierno del Estado o del Plan de Desarrollo Municipal, según sea el caso, a los programas institucionales, y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; y

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado o del Municipio, según sea el caso.

Artículo 29.- Los Entes requirentes que soliciten contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de los Sujetos de la Ley, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Artículo 30.- Sólo se podrá contratar el arrendamiento de bienes muebles para el servicio de la Administración Pública Estatal o Municipal respectivamente, cuando no sea posible o conveniente su adquisición. Para tal efecto, los Entes requirentes, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad correspondientes.

Artículo 31.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, los Entes requirentes deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.

Artículo 32.- Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, los Municipios y las Entidades de los Municipios, así como los órganos con autonomía constitucional, formularán dentro del primer mes de cada año sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;

IV. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;

V. La existencia en cantidad suficiente de los bienes o servicios; los plazos estimados de entrega o prestación; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;

VI. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;

VII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y

VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Artículo 33.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Estado o del Municipio, según sea el caso, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables. Los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

Artículo 34.- Los Sujetos de la Ley, bajo su responsabilidad, podrán requerir adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a los presupuestos autorizados y, sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

Los sujetos de la Ley Contratantes se abstendrán de convocar o formalizar la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios si no hubiese saldo disponible en las partidas correspondientes del presupuesto.

La programación de las adquisiciones, podrá rebasar el ejercicio presupuestal en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

TÍTULO QUINTO

DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 35.- Los Sujetos de la Ley que requieran el uso de edificios o locales adicionales para el desarrollo de sus actividades, procurarán utilizar los espacios propiedad de Gobierno Estatal o Municipal según corresponda, que se encuentren disponibles; de lo contrario solicitarán a la Oficialía o su similar en los Municipios o Entidades la formalización de un contrato de arrendamiento con los titulares legítimos de los inmuebles correspondientes, cuando el costo de dichos arrendamientos resulte financieramente más conveniente comparativamente con el costo de adquirir el inmueble, o que se requiera por tiempo definido y para un fin específico.

En caso de que el inmueble a arrendar, esté sujeto al régimen de propiedad en condominio y deban pagarse cuotas de mantenimiento de las áreas de uso común, el pago de las mismas podrá pactarse en el contrato de arrendamiento respectivo.

Artículo 36.- Para satisfacer los requerimientos de bienes inmuebles que planteen los Sujetos de la Ley, las Autoridades fiscalizadoras deberán:

- I. Calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a su localización;
- II. Revisar el inventario y catálogo de la propiedad patrimonial estatal o municipal, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto la necesidad de adquirir otros; y
- III. Asignar en su caso a las dependencias y entidades interesadas, los inmuebles disponibles.

Artículo 37.- La determinación del monto máximo que las Dependencias y Entidades del Ejecutivo pagarán por concepto de rentas cuando tengan el carácter de arrendatarias, corresponderá a la Secretaría por conducto del Instituto Catastral. En caso de que las Dependencias y Entidades pretendan continuar la ocupación de un inmueble arrendado, el aumento en el monto de la renta no podrá

ser superior al índice inflacionario establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al periodo de vigencia fenecido.

Artículo 38.- Para la formalización de un contrato de arrendamiento, las Dependencias y Entidades del Ejecutivo deberán integrar un expediente que contenga la documentación que acredite el derecho del arrendador para celebrar el contrato de que se trate, así como el cumplimiento de los requisitos que se establecen en esta Ley.

No se formalizarán contratos con personas que subarrienden o intermediarios sin facultades de representación.

TÍTULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Generalidades

Artículo 39.- Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios se podrán contratar mediante los procedimientos que a continuación se señalan, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas por excepción,
- III. Invitación a cuando menos tres personas por monto; y,
- IV. Adjudicación directa por tabla comparativa.

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios con valor superior a quince mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios con valor inferior a quince mil veces el salario mínimo vigente en el Estado, se adjudicarán mediante los procedimientos de contratación previstos en las fracciones III y IV de este artículo, y en los términos establecidos en el artículo 64.

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios no podrán fraccionarse para simular y evadir los topes establecidos en esta Ley. Para el cálculo de dichos topes se tomará el precio de los bienes o servicios sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 40.- Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones.

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado, o de fibras naturales no derivadas de la madera, o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional, que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Artículo 41.- En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo los Sujetos de la Ley Contratantes proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 42.- Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en el artículo 39 de esta Ley, los Entes requirentes deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.

Artículo 43.- Las condiciones contenidas en la convocatoria, a los procedimientos previstos por el artículo 39 de esta Ley, y en las proposiciones presentadas por los participantes no podrán ser negociadas.

La licitación inicia con la publicación de la convocatoria pública y en los casos de invitación a cuando menos tres personas por excepción o por monto, o de adjudicación directa por tabla comparativa, con la entrega de la primera invitación; dichos procedimientos de contratación concluyen con la emisión del fallo o, en su

caso, con la cancelación del procedimiento respectivo previsto en los artículos 51 y 59 de esta Ley.

Los Proveedores sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Proveedores.

Artículo 44.- En los procedimientos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas por excepción o por monto, se invitará a participar a los mejores Proveedores inscritos en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal, según sea el caso, que por su experiencia y capacidad garanticen un excelente precio, calidad y condiciones de venta en los bienes o servicios a contratar y cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Licitación Pública

Artículo 45.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:

I. Presencial, en la cual los Licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal o de mensajería.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los Licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Ley;

II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a través del Sistema Electrónico, se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 46 de esta Ley.

La publicación de la convocatoria, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través del Sistema Electrónico y sin la presencia de los Licitantes en dichos actos, y

III. Mixta, en la cual, la convocatoria se publicará en el Sistema Electrónico, los Licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.

Artículo 46.- El sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los Sujetos de la Ley Contratantes o los Licitantes se regulará por la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado y su Reglamento.

El sobre o el archivo electrónico que contengan las proposiciones de los Licitantes, deberá entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Artículo 47.- El carácter de las licitaciones públicas, podrá ser:

I. Internacional abierta, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

a) De la investigación de mercado se desprenda la existencia de bienes, servicios o de proveedores a nivel internacional. Se considerará que los bienes son internacionales cuando no sean producidos en el país o no cuenten por lo menos con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que establezcan las autoridades federales mediante reglas de carácter general; o

b) El Ente requirente acredite fehacientemente que no existe en el país proveedor nacional, o que el o los existentes no pueden atender el requerimiento de la dependencia o entidad en lo que respecta a cantidad, calidad y oportunidad, o que el precio no es aceptable.

En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de mercado correspondiente.

En los supuestos de licitación previstos en esta fracción y en los casos en que la autoridad federal determine mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los participantes deberán manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

II. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana o los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que establezcan las autoridades federales mediante reglas de carácter general.

Los casos de excepción correspondientes a dicho contenido, así como el procedimiento para determinar el porcentaje del mismo será el establecido por autoridades federales mediante reglas de carácter general.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los Licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Oficialía o su similar en los Municipios o en las Entidades, siempre que los Entes requirentes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.

Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

Artículo 48.- La publicación de la convocatoria a la licitación se realizará, conforme a lo siguiente:

I. En el caso de licitaciones presenciales, se publicará un resumen de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación estatal. Si la convocante es de los Sujetos de la Ley Contratantes señalados en la fracción III del Artículo 1º de esta Ley, adicionalmente deberá publicarse en un periódico de circulación local o regional.

Dicho resumen deberá contener:

- a) Nombre de la convocante responsable de la licitación;
- b) Número de licitación;
- c) Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener la convocatoria para participar en la licitación, así como su costo y la forma de pago;
- d) La descripción de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar;

e) Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la presentación y apertura de proposiciones; y, de la emisión y notificación del fallo; y

f) Los demás datos que sean necesarios a criterio de la convocante.

II. Tratándose de licitaciones electrónicas o mixtas, la convocatoria se realizará a través del Sistema Electrónico y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen y descripción de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuándo se publicó en el Sistema Electrónico y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los Licitantes copia del texto de la convocatoria.

Artículo 49.- Los procedimientos de licitación pública se sujetarán a los siguientes periodos:

I. Disposición de la convocatoria, en el caso de licitaciones presenciales: Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de publicación del resumen de la convocatoria;

II. Junta de aclaraciones: en un plazo no menor a tres días naturales previos a la inscripción y apertura de proposiciones;

III. Presentación y apertura de proposiciones: El plazo mínimo que se deberá observar entre la fecha de la publicación del resumen de la convocatoria y, el día de la presentación y apertura de proposiciones será de seis días naturales, pudiendo en su caso, cuando así lo determine la convocante, prorrogarse hasta por quince días naturales; y

IV. Emisión y notificación del fallo: en un término de hasta veinte días naturales posteriores a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, mismo que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por quince días naturales más.

Artículo 50.- La convocatoria deberá contener:

I. Datos de la convocante responsable de la licitación;

II. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la presentación y apertura de proposiciones; de la emisión y notificación del fallo; si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

III. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

IV. El número, carácter y en su caso modalidad de la licitación, el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones acompañadas, en su caso, de las traducciones correspondientes, así como la presentación de los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;

V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los Licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII. La forma en que los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

VIII. Precisar que será requisito que los Licitantes entreguen junto con el sobre cerrado, o con el archivo electrónico, según sea el caso, una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 71, de esta Ley;

IX. Precisar que será requisito que los Licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Sujetos de la Ley Contratantes, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales o si será contrato abierto y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo Licitante o a varios;

XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos;

XIV. El domicilio de las oficinas de la Autoridad fiscalizadora, o en su caso, el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la presente Ley; y

XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Artículo 51.- La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el tercer día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones mediante notificación a los Licitantes a través del medio establecido en la convocatoria, el mismo día en que se efectúen.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán (sic) parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración de su proposición.

Se considerará una variación substancial de los bienes, servicios o arrendamientos cuando represente cambios mayores al treinta por ciento de su cantidad o descripción original, porcentaje que se aplicará por cada partida; rebasando este límite, la convocante a solicitud del área requirente o de oficio, cancelará la partida, en caso de que todas las partidas rebasen este límite se cancelará el procedimiento de contratación correspondiente, haciéndolo, del conocimiento de los licitantes, a través del medio establecido en la convocatoria.

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los Licitantes la asistencia a la misma.

Artículo 52.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, así como del Ente requirente, en su caso, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes, así como los demás aspectos relacionados con el contenido de la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán, en el caso de licitaciones presenciales, demostrar la adquisición de dicha convocatoria, y en todos los casos presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, deberán efectuarse a través del medio que establezca la convocatoria, a más tardar un día hábil antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá existir un plazo de al menos tres días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados, las respuestas de la convocante y los demás aspectos acordados. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Artículo 53.- La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado o archivo electrónico, según sea el caso, que contendrá las ofertas técnica y económica.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una nueva sociedad; para tales efectos, en la proposición deberán presentar un convenio firmado por todos los representantes legales de las participantes en el que se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio convenio.

Lo anterior, sin perjuicio de que, previamente a la formalización del contrato adjudicado, las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades contraídas en dicho convenio.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

Artículo 54.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado o archivo electrónico, según sea el caso, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II. De entre los Licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con los servidores públicos que la convocante y la Autoridad fiscalizadora o el órgano de control interno del Municipio o Entidad designen, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que tratándose de licitaciones en que se utilice el criterio de evaluación binario, se hará constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte

días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de los Licitantes.

Artículo 55.- La convocante para la evaluación de las proposiciones deberá utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. Cuando la convocante requiera obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, deberá utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes.

En todos los casos la convocante deberá verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación. En el caso de utilizar el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria y oferte el precio más bajo, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

En el caso de utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, se procederá a la evaluación de la oferta técnica y se realizará el cálculo de los puntos correspondientes. Una vez obtenido el cálculo, se procederá solamente a la evaluación de la oferta económica de aquellas propuestas cuyas ofertas técnicas tengan un puntaje superior al previsto en la convocatoria.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidos. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

Artículo 56.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al Licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación pública y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso:

I. La proposición haya obtenido el mejor resultado con base en la evaluación binaria habiendo ofertado el precio más bajo;

II. La proposición haya obtenido el mejor resultado con base en la evaluación de puntos y porcentajes, cuando se haya optado por dicho criterio.

III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.

En las adquisiciones y contrataciones que regula esta ley se preferirá como Proveedores, en igualdad de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en Aguascalientes y oferten bienes que hayan sido producidos o adquiridos en el Estado. En el caso de los bienes de importación o que no se produzcan en el Estado se preferirá a empresas comercializadoras domiciliadas fiscalmente en el Estado.

La convocatoria de la licitación establecerá porcentajes diferenciales de precio hasta de un cinco por ciento en favor de los proveedores a que se refiere el párrafo anterior que hayan obtenido fallo técnico positivo.

De subsistir el empate entre las personas domiciliadas en el Estado de Aguascalientes, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo que se realice para el efecto. Será convocado al sorteo un representante de la Autoridad fiscalizadora o del órgano de control interno del Municipio o Entidad, en su caso.

En el caso de licitación pública para la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos, en los términos de la convocatoria, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 57.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I. La relación de Licitantes cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación, expresando en caso de desechamiento todas las razones legales, técnicas o

económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

II. La relación de Licitantes cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación y resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de dichas proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

IV. Nombre del o los Licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada Licitante;

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

Cuando la licitación sea presencial o mixta, el fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los Licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, cuando sea electrónica o mixta, el contenido del fallo se difundirá a través del Sistema Electrónico el mismo día en que se emita. A los Licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico.

En las licitaciones electrónicas y para el caso de los Licitantes que enviaron sus proposiciones por ese medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través del Sistema Electrónico, el mismo día en que se celebre la junta pública. A los Licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en el plazo y términos señalados en esta Ley.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Artículo 93.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los Licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma la Autoridad fiscalizadora o al órgano interno de control del Municipio o Entidad, en su caso, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato a la Autoridad fiscalizadora o al órgano interno de control del Municipio o Entidad, en su caso, a efecto de que, se emitan las directrices para su reposición.

Artículo 58.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los Licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes. Al finalizar cada acto, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el Sistema Electrónico o en el medio que se establezca en la convocatoria para efectos de su notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Asimismo, se reservará un ejemplar de las actas correspondientes, para consulta de los Licitantes, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación.

Artículo 59.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables o excedan el techo presupuestal.

La convocante podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor; existan circunstancias

justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del artículo 93 de esta Ley.

Un procedimiento de licitación o alguna de sus partidas, deberán declararse desiertos por no contar con al menos un Licitante inscrito para participar; por no contar con al menos una proposición que cumpla con los requisitos de la convocatoria, o cuando la o las presentadas excedan el techo presupuestal correspondiente.

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la convocante cubrirá a los Licitantes los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de licitación correspondiente.

CAPÍTULO TERCERO

De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 60.- En los supuestos que prevén los artículos 61 y 63 de esta Ley, los Entes requirentes, bajo su responsabilidad, podrán solicitar al Comité que no se lleve a cabo el procedimiento de licitación pública y que se adjudiquen contratos a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción o adjudicación directa, respectivamente.

La selección del procedimiento de excepción que proponga el Ente requirente ante el Comité, deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los Sujetos de la Ley. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el Titular del Ente requirente de los bienes o servicios.

En cualquier supuesto se invitará a personas inscritas en el Padrón que cuenten con capacidad de respuesta, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

El escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas o la que se propone sea adjudicada directamente; así como del resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. Asimismo, deberá contar con los razonamientos que actualicen el supuesto elegido para la excepción de la licitación y en su caso, para la procedencia de la invitación.

Artículo 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

II. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi-procesados o bienes usados.

Artículo 62.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción se sujetará a lo siguiente:

I. Deberá cumplir con la invitación de por lo menos tres Proveedores del ramo inscritos en el Padrón; los Sujetos de la Ley Contratantes adjudicarán conforme a la mejor proposición, con los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria.

II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de las autoridades fiscalizadoras o del órgano de control interno del Municipio o Entidad, en su caso;

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;

IV. En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al último párrafo de este artículo;

V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación, y;

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. En caso de no efectuarla se deberá indicar la forma y términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas deberá informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados.

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, los Sujetos de la Ley Contratantes podrán adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en la convocatoria.

Artículo 63.- Se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios por adjudicación directa, esto es, sin sujetarse a los procedimientos de contratación previstos en el artículo 39, cuando se esté en alguno de los siguientes casos:

I. Cuando no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, cuando en el mercado sólo exista un posible oferente o el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

II. Cuando se hubiere rescindido un contrato, en cuyo caso se podrá adjudicar al Proveedor que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen;

III. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Estado, como consecuencia de siniestros;

IV. Cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;

V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI. Cuando se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento por afectar directamente la solvencia de las proposiciones;

VII. Cuando se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para los Sujetos de la Ley según corresponda, o informaciones confidencial y/o reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Aguascalientes;

VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados siempre que los Sujetos de la Ley Contratantes contraten directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos;

IX. Se trate de adquisiciones de bienes que las destinatarias utilicen para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios;

X. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;

XI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos los Sujetos de la Ley Contratantes deberán pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor del Estado. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años;

XII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

XIII. Cuando se trate de adquisiciones que resulten de la elección de la opción terminal correspondiente en los contratos de arrendamiento financiero.

XIV. Cuando se trate de bienes o servicios adjudicados mediante licitación pública siempre que se tenga contrato vigente celebrado por el mismo u otro Sujeto de la Ley Contratante y el Proveedor acepte otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a características y calidad de los bienes o servicios. En este caso el precio unitario no podrá ser superior al índice inflacionario establecido por el Banco de México correspondiente al periodo transcurrido entre

el inicio de vigencia del contrato previamente celebrado y la fecha de la nueva cotización.

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en el supuesto contenido en la fracción V podrá hacerse de manera directa por el Titular del Ente requirente.

Artículo 64.- Las contrataciones con monto hasta por un límite de tres mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, se efectuarán a través del procedimiento de adjudicación directa por tabla comparativa y se adjudicarán de entre los Proveedores que ofrezcan las mejores condiciones económicas para el Estado.

Las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas por monto, quedarán comprendidas entre los tres mil y quince mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, en los cuales se deberán invitar con la debida oportunidad un mínimo de tres distintos Proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores. El procedimiento deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 62 de esta Ley, con excepción de lo dispuesto en su fracción VI. La adjudicación se podrá decidir con un mínimo de dos propuestas, siempre y cuando la mejor oferta económica sea igual o menor al precio contenido en el estudio de mercado elaborado por el Ente requirente.

Los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas por monto o la adjudicación directa por tabla comparativa deberán ser normados por la Oficialía Mayor a través del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

La dictaminación de la procedencia por adjudicación directa con base en las excepciones previstas en el artículo 63 de esta Ley, por lo que hace a los procedimientos previstos en el párrafo que antecede, corresponderá a la Oficialía Mayor o su similar en los Municipios o en las Entidades, a solicitud del titular del Ente Requirente, la que deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el segundo párrafo del artículo 60 de esta Ley.

En caso de que dos invitaciones a cuando menos tres por monto sean declarados desiertas consecutivamente, la contratación se adjudicará conforme a los lineamientos del procedimiento para adjudicación directa por tabla comparativa.

TÍTULO SÉPTIMO DE LOS CONTRATOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 65.- En las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios deberá pactarse preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados, se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones.

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados, en caso de haberse pactado en el procedimiento de contratación correspondiente.

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, los Sujetos de la Ley Contratantes podrán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables.

Artículo 66.- El contrato contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social del Sujeto de la Ley Contratante que lo celebre;

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del Proveedor adjudicado;

V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato;

VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;

VII. Precisión de si el precio es fijo, y en su caso, sujeto a ajustes y, en este último supuesto, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con opción a compra;

IX. Plazo y condiciones de pago del precio en pesos mexicanos de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se hará exigible el mismo;

X. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

XI. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen, así como la forma en que se hará esta última;

XII. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

XIII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

XIV. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley;

XV. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XVI. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de los Sujetos de la Ley Contratantes;

XVII. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los Proveedores;

XVIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del Proveedor. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XIX. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en esta Ley; y

XX. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria o cotización, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas por excepción o por monto, el contrato y sus anexos, el fallo de adjudicación, así como las propuestas técnicas y económicas son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas últimas.

Las contrataciones adjudicadas a través del procedimiento de adjudicación directa por tabla comparativa se formalizarán a través de pedido de compra en términos del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, salvo en los casos en que se contraigan obligaciones de tracto sucesivo, en las que deberá celebrarse el contrato en los términos previstos en este artículo.

Artículo 67.- Los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al Proveedor el fallo de adjudicación correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, los Sujetos de la Ley Contratantes, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrán adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si los Sujetos de la Ley Contratantes, por causas imputables a los mismos, no firman el contrato. En este supuesto, los Sujetos de la Ley Contratantes, a solicitud escrita del Proveedor, cubrirán los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de adjudicación de que se trate.

El atraso de los Sujetos de la Ley Contratantes en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el Proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del Sujeto de la Ley Contratante de que se trate.

Artículo 68.- Los Sujetos de la Ley Contratantes podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo, teniendo los Sujetos de la Ley la obligación de consumir el mínimo que se fije para el efecto.

II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios;

Los Sujetos de la Ley Contratantes con la aceptación del Proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley.

Artículo 69.- Quienes participen en las licitaciones, invitaciones a cuando menos tres por excepción o por monto, o celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar:

I. La totalidad de los anticipos que en su caso reciban;

II. El cumplimiento del contrato; y

III. La calidad de los bienes o servicios contratados.

Para cualquier procedimiento de contratación, los porcentajes de las garantías, la forma de presentarlas, el tiempo para presentarlas y los casos en que se harán efectivas éstas, serán establecidos por los Sujetos de la Ley Contratantes en la convocatoria o la invitación del procedimiento de contratación correspondiente.

Las garantías referidas en las Fracciones II y III de este artículo deberán constituirse en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha en que el Proveedor firme el contrato respectivo.

No se entregará cantidad alguna por concepto de anticipo en tanto no se entregue a los Sujetos de la Ley Contratantes la garantía señalada.

Los Sujetos de la Ley Contratantes determinarán los casos en que los Proveedores incurran en incumplimiento y por ende se hagan acreedores a la sanción correspondiente establecida en la convocatoria.

La Secretaría de Finanzas será la responsable de la ejecución de sanciones económicas que se impongan a los Proveedores.

Artículo 70.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de la Secretaría o de las Tesorerías; o a favor de las entidades con patrimonio propio, según sea el caso.

Artículo 71.- Los Sujetos de la Ley Contratantes se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, de manera directa o por interpósita persona, con las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Autoridad fiscalizadora conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellos Proveedores que incumplan un contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios, o se nieguen a subsanar el incumplimiento en un periodo razonable establecido por los Sujetos de la Ley Contratantes conjuntamente con los Entes requirentes. Asimismo, no recibirán propuestas de aquellos Proveedores que se encuentren en mora de entrega, parcial o total respecto a cualesquiera de las partidas adjudicadas, cualquiera que hubiese sido el procedimiento de adjudicación y la causa que dé origen a la mora;

IV. Aquellos Proveedores cuyo registro en el Padrón hubiera sido cancelado o suspendido, durante el plazo que duren dichas sanciones;

V. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un

contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad;

VI. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones con los Sujetos de la Ley Contratantes, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

VII. Las que, en virtud de la información con la que cuente la Autoridad fiscalizadora, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley;

VIII. Aquéllas a las que se declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores; y,

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley.

Artículo 72.- La fecha de pago al Proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan la convocatoria o la solicitud de adjudicación directa; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega del comprobante fiscal conforme a los requisitos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones legales.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de los Sujetos de la Ley Contratantes.

En caso de rescisión del contrato, el Proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de los Sujetos de la Ley Contratantes.

Artículo 73.- Los Entes requirentes podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a los Sujetos de la Ley Contratantes el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.

Cuando los Proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, los Sujetos de la Ley Contratantes, a solicitud de los Entes requirentes podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de los Sujetos de la Ley Contratantes, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

Los Sujetos de la Ley Contratantes se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un Proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

Artículo 74.- Los Sujetos de la Ley Contratantes deberán pactar penas convencionales a cargo de los Proveedores por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto total adjudicado, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

El pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacerse en la proporción que corresponda.

Los Proveedores quedarán obligados ante los Sujetos de la Ley Contratantes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los Proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados.

Artículo 75.- Los Sujetos de la Ley Contratantes podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública, invitaciones a cuando menos tres personas por excepción o por monto, adjudicación directa o adjudicación directa por tabla comparativa, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el Proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo.

Artículo 76.- Los Sujetos de la Ley Contratantes por sí mismos o a solicitud de los Entes requirentes podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que el Ente requirente comunique al Sujeto de la Ley Contratante, el incumplimiento, aportando las pruebas que lo demuestren;

II. Hecho lo anterior se comunicará por escrito al Proveedor el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. En caso de que no las aporte, se tendrán como ciertos los hechos que se le imputen;

III. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la autoridad contará con un plazo de quince días para resolver considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer y notificar al Proveedor su resolución. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada;

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el Ente requirente por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión;

V. Iniciado un procedimiento de conciliación los Entes requirentes, bajo su responsabilidad, podrán solicitar la suspensión del trámite del procedimiento de rescisión;

VI. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Ente requirente de que

continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes;

VII. Los Entes requirentes podrán solicitar se deje sin efecto el procedimiento de rescisión, cuando durante el mismo adviertan que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tienen encomendadas. En este supuesto, deberán elaborar un dictamen en el cual justifiquen que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes;

VIII. Al no dar por rescindido el contrato, el Sujeto de la Ley Contratante y el Ente requirente conjuntamente, establecerán con el Proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 73 de esta Ley;

IX. Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el Ente requirente podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Artículo 77.- Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos, cuando concurren causas que afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Gobierno del Estado o a los Municipios. En estos supuestos, los Sujetos de la Ley reembolsarán al Proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Artículo 78.- Los Entes requirentes estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, los Sujetos de la Ley Contratantes en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; y en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del Proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del Proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para los Sujetos de la Ley Contratantes durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.

Artículo 79.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, los Entes requirentes, bajo su responsabilidad podrán suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a los Entes requirentes, previa petición y justificación del Proveedor, los Sujetos de la Ley Contratantes determinarán se reembolsen al Proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

TITULO OCTAVO

DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

CAPITULO ÚNICO

Artículo 80.- Las Autoridades fiscalizadoras, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar en cualquier momento, que los procedimientos de contratación se realicen conforme a lo establecido en esta Ley, o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados.

Las Autoridades fiscalizadoras, en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los Sujetos de la Ley, e igualmente podrán, solicitar de los servidores públicos y de los Proveedores que participen en las contrataciones, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Artículo 81.- Las visitas o inspecciones se practicarán en días y horas hábiles por personal autorizado por las Autoridades fiscalizadoras, mediante el oficio de

comisión fundado y motivado que señalará el periodo, el objeto de la comisión y las personas que las practicarán, mismas que se identificarán al momento de la diligencia.

El resultado de la visita o inspección se hará constar en acta que será firmada por la persona que la practicó, aquella con quien se atendió la diligencia y dos testigos propuestos por ésta o en caso de no hacerlo, por los que designe quien la realizó.

Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Artículo 82.- En relación a la comprobación de la calidad y de las especificaciones solicitadas de las mercancías, materias primas o bienes muebles, en caso de requerirse, se efectuará en los lugares o laboratorios con los que cuenten los Sujetos de la Ley, o cualquier tercero con la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo.

Dicha comprobación podrá hacerse a petición de la parte interesada, del Sujeto de la Ley Contratante o Ente requirente, o de oficio por las Autoridades fiscalizadoras para lo cual recabará muestras de los bienes suministrados por el Proveedor.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el Proveedor y el representante del Ente requirente respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del Proveedor no invalidará dicho dictamen.

TÍTULO NOVENO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 83.- Los Proveedores que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por las Autoridades fiscalizadoras, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes, en la fecha de infracción.

Cuando los Proveedores injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos o pedidos, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo 84.- Independientemente de la determinación de las Autoridades fiscalizadoras, los Sujetos de la Ley Contratantes, podrán decidir la suspensión o

cancelación del registro del Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal, según sea el caso.

Artículo 85. Las Autoridades fiscalizadoras, además de la sanción a que se refiere el artículo 83 de esta Ley, inhabilitarán temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los Proveedores que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier Sujeto de la Ley Contratante en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado;

II. Los Proveedores a los que algún Sujeto de la Ley Contratante les haya rescindido administrativamente un contrato en un plazo de tres años;

III. Los Proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Sujeto de la Ley de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción VI del artículo 71 de esta Ley; y

VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 102 de esta Ley.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de dos años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Autoridad fiscalizadora lo publique en el Periódico Oficial del Estado.

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo 83 de esta Ley, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Los Sujetos de la Ley Contratantes, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de

esta Ley, remitirán a las Autoridades fiscalizadoras la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

En casos excepcionales, previa autorización de las Autoridades fiscalizadoras, los Sujetos de la Ley Contratantes podrán aceptar proposiciones de Proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.

Artículo 86.- Las Autoridades fiscalizadoras impondrán las sanciones considerando:

- I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
- II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- III. La gravedad de la infracción, y
- IV. Las condiciones del infractor.

Artículo 87.- En el procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas a que se refiere este Capítulo, se observarán las siguientes reglas:

- I. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser mayor de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y
- III. La resolución será debidamente fundada y motivada debiendo comunicarse por escrito al afectado.

Artículo 88.- Las Autoridades fiscalizadoras aplicarán las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

Las Autoridades fiscalizadoras en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial al Sujeto de la Ley Contratante o al Ente requirente, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de

estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

Artículo 89.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Artículo 90.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 85 de esta Ley.

Artículo 91.- Los Sujetos de la Ley Contratantes, los Entes requirentes y los Proveedores, tendrán la obligación de proporcionar a las Autoridades fiscalizadoras los informes, datos y documentos que les requiera, dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación; las Autoridades fiscalizadoras podrán ampliar el plazo referido, a petición del requerido, para cumplir el requerimiento cuando se justifique.

Artículo 92.- Las personas interesadas podrán denunciar por escrito, directamente en las oficinas de las Autoridades fiscalizadoras, los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, a fin de que se determine la posible responsabilidad de algún o algunos servidores públicos.

TÍTULO DÉCIMO

DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO PRIMERO

De la Instancia de Inconformidad

Artículo 93.- En el caso de adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, independientemente del monto de contratación, la inconformidad de un Proveedor deberá ser presentada por éste ante las Autoridades fiscalizadoras, por escrito, dentro de los plazos que se señalan cuando ocurra cualquiera de los actos de los procedimientos de contratación que se indican a continuación:

I. La convocatoria a la licitación y, las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 52 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. La invitación a cuando menos tres personas.

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, debiendo hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes;

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al Licitante en los casos en que no se celebre junta pública;

IV. La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el Licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, y

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los tres días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de Licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho de inconformarse, sin perjuicio de que las Autoridades fiscalizadoras puedan actuar en cualquier tiempo en términos de ley.

En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y deberá acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta y documentación indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.

Artículo 94.- La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

El escrito inicial contendrá:

I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público.

Cuando se trate de Licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término;

II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por lista;

III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;

IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y

V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el Licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

En las inconformidades que se presenten a través del Sistema Electrónico, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expidan las Autoridades competentes, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas.

Tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando se omite señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.

Artículo 95.- La instancia de inconformidad es improcedente:

- I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 93 de esta Ley;
- II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente;
- III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y
- IV. Cuando se promueva por un Licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.

Artículo 96.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:

- I. El inconforme se desista expresamente;
- II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que se refiere la fracción V del artículo 93 de esta Ley; y
- III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que establece el artículo anterior.

Artículo 97.- Las notificaciones se harán:

- I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:
 - a) La primera notificación y las prevenciones;
 - b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;
 - c) La que admita la ampliación de la inconformidad;

d) La resolución definitiva; y

e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la inconformidad;

II. Por lista, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, y

III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante.

Las notificaciones a que se refiere este artículo podrán realizarse a través de (sic) del Sistema Electrónico, conforme a las reglas que al efecto establezcan las Autoridades competentes. Adicionalmente, para el caso de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico.

Artículo 98.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.

Solicitada la suspensión correspondiente, la Autoridad fiscalizadora que conozca de la inconformidad deberá acordar lo siguiente:

I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida; y,

II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla.

En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.

En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar.

La garantía no deberá ser menor al veinte ni mayor al cincuenta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar.

La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme.

A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.

Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la Autoridad fiscalizadora resolverá el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.

Artículo 99.- La Autoridad fiscalizadora que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.

Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.

Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la Fracción IV del Artículo 94.

Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.

Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 94.

El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía.

La Autoridad fiscalizadora que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 100.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término de quince días hábiles.

Artículo 101.- La resolución contendrá:

I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;

II. La fijación clara y precisa del acto impugnado;

III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;

V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y

VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato.

Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será notificada a las partes.

Artículo 102.- La resolución que emita la autoridad podrá:

I. Sobreseer la instancia;

II. Declarar infundada la inconformidad;

III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;

IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;

V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y

VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos de la fracción V del artículo 93, de esta Ley.

En los casos de las Fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con multa en términos del artículo 83 primer párrafo de esta Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los Licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Artículo 103.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente.

El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido la convocante.

Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.

Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato.

La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emitan la Autoridades fiscalizadoras en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se dé cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un Licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.

Artículo 104.- A partir de la información que conozcan las Autoridades fiscalizadoras derivada del ejercicio de sus facultades de verificación, podrán realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 93 de esta Ley.

El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que las Autoridades fiscalizadoras señalarán con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.

Si la autoridad fiscalizadora advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación revisado, podrá decretar de oficio la suspensión, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla.

Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Procedimiento de Conciliación

Artículo 105.- En cualquier momento los Proveedores, los Entes requirentes y los Sujetos de la Ley Contratantes, podrán presentar ante la Autoridades fiscalizadora correspondiente, la solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Autoridad fiscalizadora señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las partes. La inasistencia por parte del Proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

Artículo 106.- En la audiencia de conciliación, la Autoridad fiscalizadora, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hicieren valer las partes, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

Artículo 107.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Autoridad fiscalizadora dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual los Entes requirentes deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo.

En caso de no existir acuerdo de voluntades, se dará inicio al procedimiento de rescisión.

Artículo 108.- En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos, la entrega de los bienes, la prestación de los servicios y la completa resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas.

CAPÍTULO TERCERO

Del Recurso de Revisión y de la Competencia Judicial

Artículo 109.- En contra de las resoluciones definitivas que dicten la Oficialía Mayor o su equivalente en los Municipios, las Autoridades fiscalizadoras y los Comités, se podrá interponer recurso de revisión en los términos y con los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, mismo que se tramitará y resolverá por la propia autoridad de la que se reclame el acto, conforme a lo dispuesto en la citada Ley.

Respecto de los actos señalados en el artículo 93 de esta Ley, deberá agotarse la instancia de la inconformidad para la interposición del recurso de revisión.

Artículo 110.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales del Estado de Aguascalientes, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alternativo de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.

T R A N S I T O R I O S :

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, publicada en Sección Primera del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 25 de septiembre de 2000, así como sus reformas.

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO CUARTO.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos de conciliación, inconformidad y de sanción que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de haberse iniciado tales procedimientos.

ARTÍCULO SEXTO.- Cuando otros ordenamientos jurídicos se refieran a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes en materia del procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas previsto en el Título Cuarto, Capítulo Único o denuncias por inconformidades, en los términos establecidos en el Título Quinto, Capítulo I de esa Ley, se entenderán referidos al Título Noveno, Capítulo Único y

Título Décimo, Capítulo Primero, respectivamente, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, contenida en este Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cuando otros ordenamientos jurídicos se refieran a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se entenderán referidos a la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, contenida en este Decreto.

ARTÍCULO OCTAVO.- Cuando otros ordenamientos jurídicos se refieran a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes en materia de conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro de bienes muebles e inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles del Gobierno del Estado, se entenderá referido a la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes contenida en este Decreto.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 12 de marzo del año 2015.

A T E N T A M E N T E

LA MESA DIRECTIVA

Dip. Juan Manuel Méndez Noriega,
PRESIDENTE.

Dip. Anayeli Muñoz Moreno,
PRIMERA SECRETARIA.

Dip. Oswaldo Rodríguez García,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 20 de marzo de 2015.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera García.- Rúbrica.